



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISEIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO: 11001-33-35-026-2021-00136
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: TERRY LEANDRO VÁSQUEZ SARMIENTO
DEMANDADO: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Dentro del presente asunto, el señor **TERRY LEANDRO VÁSQUEZ SARMIENTO**, a través de apoderado judicial presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la **SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL**, ello con la finalidad de obtener la nulidad de la respuesta al derecho de petición con el radicado número SDQS No. 3225222020 del 17 de noviembre de 2020, por medio del cual niega la solicitud de reconocimiento y pago de unas acreencias laborales por la presunta configuración de un contrato realidad, en el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2012 hasta el 12 de enero de 2020.

Ahora bien, este despacho observa que no es posible admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, se debe recordar que, a través del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

De la misma manera, y a través del decreto 417 de 2020, el Gobierno nacional adoptó varias medidas encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los servicios de justicia prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional a través del decreto 806 del 4 de junio de 2020, adoptó las medidas necesarias para la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizando de esa manera, el

trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria. Ello, con el fin de garantizar que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, el ejercicio de los derechos y de la misma manera, se evite la aglomeración de personas en los despachos y centros de servicio judiciales, una vez fuera levantada la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo tanto, y dando aplicación a lo establecido por la ley 1437 de 2011, el decreto 806 de 2020 y la ley 2080 de 2020, este despacho judicial **INADMITIRÁ LA DEMANDA**, por las siguientes razones:

1. De las pretensiones de la demanda y el acto acusado

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

- 1. La designación de las partes y sus representantes.*
 - 2. **Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.***
 - 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
 - 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
 - 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
 - 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.*
- El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

De la misma manera, el artículo 163 del CPACA, señala que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Así mismo, si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.

Teniendo en cuenta las normas anteriores, la apoderada judicial de la parte demandante solicita dentro del escrito contentivo de la demanda la nulidad del siguiente acto administrativo:

Respuesta al derecho de petición con el radicado número SDQS No. 3225222020 del 17 de noviembre de 2020.

Ahora bien, al revisar el material probatorio obrante en el plenario, este Despacho Judicial observa que, la respuesta emitida por la entidad contiene el siguiente número de identificación: **S2020118330 del 18 de noviembre de 2020**, el cual da respuesta al derecho de petición radicado No. **SDQS No. 3225222020**, por lo que no es plausible para el Despacho que la Profesional del Derecho solicite en nulidad la petición radicada ante la administración o en su defecto, no identifique de manera clara el acto acusado que pretende en nulidad.

Conforme con lo anterior, la apoderada judicial de la parte actora deberá adecuar las pretensiones de la demanda, señalando para tal efecto, el acto administrativo correcto que pretenda en nulidad.

2. De la reclamación administrativa y las pretensiones de la demanda

Analizada la petición elevada por el actor el 13 de noviembre de 2020, se observa que en la misma se solicitó el pago de diferencias salariales que en consideración de la activa se le adeudan, junto con otros emolumentos prestacionales y unas indemnizaciones, todo ello en el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2012 hasta el 12 de enero de 2020.

Ahora bien, al realizar la comparación de la solicitud elevada ante la administración, con las pretensiones de la demanda, se observa que existen diferencias considerables, por cuanto que, en la demanda se incluyeron pretensiones que no se elevaron ante la Secretaría de Integración Social.

Conforme con lo anterior, es claro que las pretensiones instauradas en sede judicial exceden lo solicitado ante la administración, motivo por el cual no guardan concordancia las instancias administrativa y judicial.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que debe existir congruencia entre lo solicitado a través del derecho de petición que de origen a los actos acusados, y lo pretendido en el proceso judicial, pues aunque es posible que quien demanda agregue fundamentos de derecho adicionales en sede judicial, **no ocurre lo mismo frente a las pretensiones**, dado que en este preciso ítem, debe existir total correspondencia entre lo conocido por la administración previamente a demandar y lo que se solicita a la jurisdicción contencioso administrativa.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha sostenido lo siguiente¹:

¹ Consejo de Estado. Providencia adiada 19 de febrero de 2015. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 2004-00247.

“La vía gubernativa se torna así en el instrumento de comunicación e interacción entre la Administración Pública y los administrados, cuando media un conflicto de intereses, edificándose no sólo como una forzosa antesala que debe transitar quien pretende resolver judicialmente un asunto de carácter particular y concreto, sino en un mecanismo de control previo al actuar de la Administración, cuyo beneficio es de doble vía, pues, constituye tanto la posibilidad de obtener en vía administrativa la satisfacción de una pretensión subjetiva, como la oportunidad de ejercer un control de legalidad sobre las decisiones administrativas, a fin de que se tenga la oportunidad de revisar los puntos de hecho y de derecho frente a un asunto que, posteriormente, se ventilará dentro de un proceso jurisdiccional.

Igualmente ha anotado esta Corporación que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley, sino el fiel contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilarán en sede judicial.”

De acuerdo con lo explicado, la situación planteada repercute directamente en el fondo del asunto, pues en caso de continuar el proceso en la manera como viene promovida la demanda, ello implicaría necesariamente una decisión de ineptitud de la demanda parcial, frente a las pretensiones que no concuerden con el derecho de petición.

Así mismo, frente a las pretensiones que no se incluyeron de ninguna manera en la petición, tampoco se podría realizar un estudio de legalidad en cuanto a su negativa, al no haber sido conocido tal pedimento previamente por la Secretaría de Integración Social.

Por lo anterior, deberá corregirse la demanda para que esta guarde total congruencia con lo pedido ante la administración, en todos los ítems que componen la misma.

3. Del derecho de postulación

El Capítulo I de este ordenamiento, consagra lo aspectos relativos a la capacidad, representación y ejercicio del derecho de postulación, sobre este último aspecto el artículo 160 dispuso:

“Artículo 160. Derecho de postulación. *Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.*

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.”

A su turno, el artículo 5 del decreto 806 de 2020, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.”

Subraya fuera de texto

Teniendo en cuenta la norma transcrita, este Despacho Judicial observa que, el poder aportado por la Profesional del Derecho no cumple con lo preceptuado en la norma antes descrita, habida consideración que, no aporta al libelo demandatorio constancia o certificación de mensaje de datos que acredite la remisión del poder por parte del poderdante al apoderado.

Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia en auto de radicado 55194, negó la personería jurídica para actuar en un proceso a un abogado debido a que el poder anexado no cumplía con los requisitos del decreto 806 del 2020.

La corte recordó que, de conformidad con lo reglado en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, un poder para ser aceptado requiere:

“i) Un texto que manifieste inequívocamente la voluntad de otorgar poder, con, al menos, los datos de identificación de la actuación para la que se otorga y las facultades que se otorgan al apoderado.

ii) Antefirma del poderdante, la que naturalmente debe contener sus datos identificatorios.

iii) Un mensaje de datos, transmitiéndolo.

Es evidente que el mensaje de datos le otorga presunción de autenticidad al poder así conferido y reemplaza, por tanto, las diligencias de presentación personal o reconocimiento”.

La honorable Corte recalco que, es de cargo del abogado demostrarle a la Administración de Justicia que el poderdante realmente le otorgó poder.

De la misma manera, deberá adecuar el poder, identificando plenamente el acto administrativo a demandar.

Por lo anterior, y como quiera que no se encuentra demostrado el envío del mensaje de datos por parte del poderdante al apoderado para el otorgamiento debido del poder, el Profesional del derecho, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 5 del decreto 806 de 2020, conforme a lo descrito a lo largo de este proveído.

4. Acreditación envío copia de la demanda y sus anexos.

En el artículo 6°, inciso 3° del Decreto 806 de 2020, señala:

(...)

“En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos”

Sombreado y subraya fuera de texto

Por su parte, el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, establece que:

“El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos”

Por lo anterior, y como quiera que el apoderado judicial de la parte actora no acreditó con la radicación de la demanda el envío simultaneo a través de correo electrónico, de la copia de la demanda junto con sus anexos a la entidad demandada, este Despacho Judicial no puede dar el trámite correspondiente al presente proceso.

5. Del razonamiento de la cuantía

El artículo 155 de la ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2° específicamente a los de carácter laboral.²

Dicha disposición fue modificada por el artículo 30 de la ley 2080 de 2021, señalando para tal efecto, lo siguiente:

² **“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

“Artículo 30. Modifíquese el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 155. Competencia de los juzgados administrativos en primera instancia. Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, **sin atención a su cuantía.**

(...)

Sin embargo, dicha disposición solo puede ser aplicada a las demandas radicadas un año después de la publicación de la ley 2080 de 2021³, es decir que, para el caso concreto, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 155 del CPACA.

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo legal mensual vigente aprobado por el Gobierno Nacional es de \$908.526, luego entonces, al realizar la operación matemática, tenemos que los 50 S.M.L.M.V. determinados en la norma precitada, equivalen a la suma de **\$45.426.300.00.**

En relación con la estimación razonada de la cuantía, la parte actora la estima en **\$440.869.567** tasándola desde el año 2012 hasta el 2020.

Recuérdese que la cuantía debe calcularse desde cuando se causaron los derechos y hasta la presentación de la demanda **sin que supere los tres años, y sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios**, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

Así las cosas, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la ley 1437 del 2011, ley 1564 del 2012, decreto 806 de 2020 y ley 2080 de 2020, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE

³ **Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa.** La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. (ley 2080 de 2021)

PRIMERO. - INADMITIR LA DEMANDA instaurada por **TERRY LEANDRO VÁSQUEZ SARMIENTO**, contra de la **SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL**.

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO. - Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá acreditar el envío de la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído, a la entidad demandada a través de correo electrónico de notificaciones judiciales.

Sin embargo, de no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

21



Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5cf7d56ae8fca5f0dfd13d333fb42cbaf3c43e8a2abb3f8554e65fee68a0810c**

Documento generado en 29/06/2021 02:00:14 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>